Conclusiones y recomendaciones

Carol Iván Abaunza Forero
Mónica Alexandra Mendoza Molina
Paola Bustos Benítez
Giovanny Paredes Álvarez
Karla Vanessa Enriquez Wilches
Andrea Carolina Padilla Muñoz

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

ABAUNZA FORERO, C.I., MENDOZA MOLINA, M.A., BUSTOS BENÍTEZ, P., PAREDES ÁLVAREZ, G., ENRIQUEZ WILCHES, K.V., and PADILHA MUÑOZ, A.C. Conclusiones y recomendaciones. In: *Adultos mayores privados de la libertad en Colombia* [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Instituto Rosarista de Acción Social – SERES, 2014, pp. 250-260. ISBN 978-958-738-532-8. <https://doi.org/10.7476/9789587385328.0011>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Conclusiones y recomendaciones

Trato

Definitivamente el AM en Colombia requiere recobrar su valía, un lugar que le permita coexistir con distintas generaciones sin ser segregado, dándole cabida en una sociedad incluyente para todas las edades. Lo anterior supone tener acceso a la salud y a una forma de vida saludable, a participar en el desarrollo económico de sus comunidades con beneficio propio, a un entorno social favorable. Los AM deben compartir la suerte de otros grupos en condición de vulnerabilidad u opresión, como es el caso de mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en situación de extrema pobreza, etc., para el reconocimiento de sus derechos específicos o particulares. Trato diferencial que debe asegurar una Convención Internacional de las Personas Mayores.

Como grupo etario, el AM requiere de la construcción de una legislación que asuma su realidad y haga clara, explícita y efectiva la garantía estricta de sus derechos, los cuales se pervierten aún más dentro de los EPC, donde no existen pabellones o espacios especializados para los AMPL. La experiencia mostró que también se pueden generar dinámicas de autogestión y solidaridad entre internos que comparten, en razón de su edad, necesidades, sentimientos y concepciones de la vida.

Deben incluirse perspectivas de diversas disciplinas para el diseño de nuevos establecimientos y la modificación o adecuación de los ya existentes, con el fin de generar espacios donde realmente se tengan en cuenta las necesidades y las posibilidades de esta población. Así, los espacios deben contar con rampas, corredores amplios, barandas en casos especiales y tramos cortos entre celdas, baños, comedor y patio, lugares en los que transcurre la vida cotidiana. Igualmente, se debe garantizar el acceso a ayudas técnicas en caso de presentarse alguna discapacidad, como bastones, caminadores, sillas de ruedas, audífonos, etc.

En ese sentido, se debe contar con establecimientos o pabellones exclusivamente destinados al AM, diseñados y contruidos con una distribución geográfica adecuada, que además permitan su clasificación por comportamientos delictuales. En Colombia no se cuenta con espacios tan especializados, pero hay pocos establecimientos que han implementado pa-

bellones exclusivos para adultos mayores, lo cual ha demostrado resultados muy positivos en cuanto a convivencia, tratamiento y trato.

Así, los EPC que cuentan con pabellones especiales para AM presentan una dinámica diferente a los que carecen de ellos. Sin embargo, estos pabellones son escasos por la situación de hacinamiento presente en todo el país. Este hecho es lamentable, pues la percepción es que con pabellones exclusivos para los AMPL se logra dignificar a esta población, reconociendo su situación de vulnerabilidad frente al resto de los internos. Mientras no se aminore la situación de hacinamiento que se presenta en el país y que posiblemente llegará a cifras del 60%, pensar en pabellones exclusivos, sobre todo en la población masculina, es casi una utopía.

Por otro lado, la persona mayor debe ser considerada como sujeto activo especial de delito, no para vestirlo con un ropaje de impunidad o presumirlo inimputable, aunque en ocasiones pueda llegar a serlo, sino como sujeto personal y socialmente merecedor de un trato especial, de un acompañamiento exclusivo, de un tratamiento diferente que le permita como sujeto de derechos alcanzar la rehabilitación y la socialización, que supone justifica la pena, así se encuentre en las postrimerías de su existencia, por cuanto sigue siendo persona y poseedor de sueños y esperanzas.

En casos de deterioro físico o mental, es decir, cuando la condición de salud no es compatible con la vida en prisión, se sugiere el traslado de estos AM a casas geriátricas o instituciones psiquiátricas, aplicando también el otorgamiento de prisión domiciliaria. Así pues, al igual que el adolescente infractor, resultaría necesario darle al infractor AM un trato especial, dado que la respuesta institucional que se da en relación con la investigación, el juzgamiento y la sanción no contempla tratos diferenciales de mayor envergadura, como se puede corroborar a través de las distintas instituciones procesales.

Por último, la dignidad es una categoría transversal a la atención en salud, así como a la no discriminación e igualdad. Se puede afirmar única y exclusivamente bajo el contexto de la presente investigación que el trato no digno de la PPL está relacionado con una falencia en el enfoque diferencial.

Política penitenciaria para el adulto mayor privado de la libertad

El ya limitado presupuesto se difumina al ser asignado en general para los grupos en condiciones excepcionales, sin tener en cuenta que entre este conglomerado existen subgrupos que tienen necesidades específicas, como el caso de los AMPL. Por esta razón, se recomienda realizar la asignación de recursos acorde a los programas diseñados y desarrollados según las características de cada población.

No se encuentran funcionarios profesionales especializados en AM que desde sus respectivas disciplinas o especialidades actúen como asesores, tanto en la planeación como en la ejecución de los programas específicos para los AMPL. Por este motivo, se propone la vinculación de personal especializado en el manejo de AM, pues el conocimiento que ofrecen los profesionales en gerontología o geriatría (tomadas a manera de ejemplo) puede orientar con mayor precisión las acciones por emprender con aquellos internos cuyas necesidades requieren atención especial.

En los planes de formación para los funcionarios del Inpec no se contemplan temas de AMPL como ejes de aprendizaje específicos, por cuanto no se considera una especialidad por aprender. Por esa razón, se deben incluir en los componentes temáticos de la formación del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en la Escuela Penitenciaria capacitaciones en el manejo de esta población, sus necesidades específicas para el trato, tratamiento, atención médica y estrategias que pueden guiar algunas maneras adecuadas de acompañamiento en los procesos laborales, de formación y demás que se desarrollen durante su estadía en prisión. Estos procesos formativos deben hacerse extensivos al resto del personal de los establecimientos. Una segunda recomendación en ese sentido es llevar a cabo jornadas con los funcionarios que ya se encuentran en los establecimientos.

El hacinamiento actual unido a las condiciones precarias de atención en salud, alojamiento, alimentación, asesoría jurídica, atención y tratamiento penitenciario es la exigencia más clara de la necesidad de dar cumplimiento real a la normatividad nacional e internacional, y los efectos directos deben observarse inicialmente en el cumplimiento de las exigencias

de higiene, adecuación al clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación, entre otros. No se invita a que tengan privilegios para los AMPL, pero sí a que las estrategias que se implementen para atenderlos faciliten la infraestructura, la cual debe adaptarse a sus condiciones particulares.

Como lo menciona la División de Población de la Cepal (Celade, 2001): “Los Adultos Mayores, al igual que cualquier persona, puede mantener y desarrollar actividades sociales determinada por tres factores o variables: Condiciones de salud, situación económica y apoyo social recibido. Así, la edad por sí sola no debería impedir el desarrollo social, exceptuando que por circunstancias puntuales las variables mencionadas presenten un deterioro”. Esta debería ser la premisa para la realización de programas, más aún cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantean objetivos que deberían aplicar los países al promover la formulación de leyes, dirigidos a la atención de los AM en todos los componentes de la vida, pero asegurando que los planes y los programas cuenten con presupuestos para poderlos ejecutar (OPS, 2012). Para este organismo, “el desarrollo de conductas personales y ambientales saludables durante todo el ciclo de vida hasta llegar a un envejecimiento sano y activo, la prevención y manejo de enfermedades crónicas y otros padecimientos relacionados con la edad, así como el fortalecimiento y desarrollo de servicios de salud de calidad” deberían ser la prioridad de los países (OPS, 2012).

Colombia parecía haber dado prioridad a este temática al incorporar una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2007-2019), donde diversos autores que se encuentran involucrados han realizado diversos análisis al respecto (Ministerio de Protección Social, 2007). Sin embargo, a la fecha se mantiene como una versión preliminar para análisis de involucrados en la gestión de la política, a pesar de que se había previsto que sería aprobada antes de finalizar el 2010.

Política criminal

Todo tiene un tiempo y un límite en este mundo y en Colombia no se contemplan mecanismos que abrevien la reclusión del AM, aun con el amplio margen de configuración normativa con el que cuenta el aparato judicial, como manifestación de su competencia para fijar las políticas criminales del Estado. Sería importante reflexionar sobre la posibilidad de colocar límite máximo de edad para estar en un EPC, así como hay un límite mínimo para entrar, y se sugiere que se utilice para ese máximo el indicador de esperanza de vida en Colombia. Los AMPL que se encuentren por encima de ese límite deberán estar fuera del EPC, bien sea en un tipo diferente de reclusión o internamiento en unidades geriátricas urbanas o rurales, como existen para los menores; otorgar la libertad condicional por razón de la edad, aplicación de la condena de ejecución condicional considerando que no existe necesidad de ejecución de la pena por la mayor edad del condenado, dependiendo del comportamiento atribuido, prisión domiciliaria, indulto, libertad con control de mecanismos telemáticos. Estos ajustes tendrían como fin preservar la dignidad de la persona recluida, evitando que sus últimos días los pase en prisión o llegue a morir en ella, máxime cuando el AMPL tenga pronosticada una enfermedad grave o una muerte cierta e inminente.

Atención y tratamiento

La situación del interno no culmina con la imposición de la pena, sino que adicionalmente requiere del tratamiento pertinente para su resocialización, por lo que en primera instancia debe concientizarse sobre los derechos que vulneró, así como los derechos que le asisten al momento de empezar a purgar la pena y durante el tiempo que esta dure. Se pudo establecer que los AMPL carecen de una información apropiada al respecto, así como de la forma de acceder a beneficios. Los que conocen estos datos ha sido gracias a la información suministrada por otros internos o instituciones.

Se encontró relación entre los periodos de internamiento y diferentes niveles de afectación psicológica y cognitiva en los AMPL que participaron

en la aplicación de instrumentos. Esto abre un abanico de necesidades en cuanto a intervenciones de manera diferencial con este grupo etario. No obstante, se hace necesario conocer a profundidad y en el total de la población de AMPL los cambios que se presentan a nivel psicológico, cognitivo y comportamental, en relación con los periodos considerados durante este estudio (internamiento inicial, intermedio, prolongado), para ofrecer actividades ocupacionales, educativas o de enseñanza acordes con lo dinámico del desarrollo humano, máxime cuando se enfrentan a situaciones límites como la privación de la libertad.

Las limitaciones físicas que imponen los deterioros de la edad no parecen afectar las capacidades intelectuales de los AMPL participantes, lo que muestra que la capacidad criminal en términos de planeación o adaptación para la comisión de actos delictivos se encuentra en el mismo nivel de un delincuente más joven. Por esto, los programas con AMPL deben definir claramente cuáles de las acciones corresponden a la prevención de la reincidencia y cuáles forman parte de aquellas que buscan disminuir los efectos negativos que vengan con la prisionización. Un punto de partida es llevar a cabo estudios con muestras representativas en las que se analicen y caractericen funciones cognitivas y condiciones psicológicas, a efecto de establecer una línea de base que indique la real disminución, el incremento o la incapacidad para el crimen, la peligrosidad y el pronóstico de reincidencia.

Condiciones jurídicas

Desde hace varios años Colombia ha implementado el inflacionismo penal, y a través del sistema penal acusatorio ha permitido la violación flagrante y vergonzosa de los derechos de las personas que ingresan a este. Un proceso penal, en vez de ser un asunto para la búsqueda de la verdad y la sanción oportuna o efectiva del delito, se ha convertido en un canje de inocencia por “mejores probabilidades de salir rápido”. Un trueque de preacuerdos y silencios en los que el profesional del derecho no hace saber al cliente la razón o la naturaleza jurídica del delito ni la sanción que amerita, por cuanto este no es consciente del delito que se le imputa o los derechos que

tiene. En el peor de los casos, termina justificando su comportamiento delictuoso, pues la sensación de pérdida de autoridad que acompaña estos procesos es reforzada con algunos jueces que han permitido la corrupción en los estrados. Profesionales del derecho han negociado con la verdad o la libertad y entes acusadores que se han ensañado en sus posturas sin aceptar errores cometidos.

¿Qué se puede derivar de un Estado en el que la autoridad no se respeta porque se ha perdido su razón de ser, unos organismos de defensa de los derechos que no lo hacen y una ley inaplicada o en ocasiones absurda? No es necesario un estudio científico para determinar que lo que hoy sucede es indiscutiblemente un efecto acumulativo de lo acontecido desde periodos atrás. En Colombia se castiga al inocente como al culpable y este último no se resocializa porque en este Estado la ley es burlada por quienes deberían defenderla, así como por los que la conocen y han aprendido a obstruirla; en medio de estas realidades, procura abrirse paso una verdad a gritos: “es tan justo castigar al delincuente como absolver al inocente”.

Esa condición de incapacidad de los penados para demandar respeto, garantía y cumplimiento de derechos se acentúa en la mayoría de EPC, tanto por la falta de asesores legales privados o públicos como por ausencia de la Procuraduría. Ellos deben hacer el seguimiento a las penas que se están cumpliendo, a fin de solicitar las libertades o beneficios que se causen oportunamente. Contrario a esto, pareciera que se ha dado una trasmutación de la función de la prisión como estamento de resocialización a un sitio donde solo se recuerda la pena y se olvida al hombre que la habita y la sufre.

En este contexto, los AMPL son considerados como parte de un grupo vulnerable, por el hecho de ser una población sujeta a especial protección constitucional. Teniendo en cuenta que el Estado es el directo responsable de su protección, los convenios internacionales contienen unos derechos específicos en relación con la privación de la libertad de esta población. El Estado tiene la obligación de tratar a la población carcelaria en general de manera justa y digna bajo un esquema de igualdad, así como garantizar sus derechos ya que está aportando al proceso de reintegración de esta a la comunidad (Castro *et al.*, 2010, pp. 19-288). El desafío del siglo XXI es mantener sistemas penitenciarios que se caractericen por la dignidad, efi-

ciencia y respeto por los derechos fundamentales, por esta razón resulta de mayor importancia el diseño de nuevos modelos que propendan hacia la reestructuración de la legislación en este sentido. Ejemplo de esto puede ser la implementación de normatividad especializada para AM y AMPL; aspecto que puede hacer posible el acceso efectivo a la justicia y asistencia jurídica que permita la concreción en el marco de sus derechos, a rebajas de pena, permisos, sustitución de la prisión intramural, libertad condicional, libertad definitiva, la salud, el trabajo, la familia, la educación y la resocialización.

Condiciones de vida del adulto mayor privado de la libertad

La privación de la libertad del AM, previa constatación de su caracterización, debe ser excepcional en un EPC donde se le respete su dignidad, que se ha de traducir en condiciones físicas aptas para su internamiento y servicios básicos en materia de salud, alimentación y ocupación. Sobre este último aspecto, sería necesario contar con una mayor disponibilidad de datos estructurados sobre la información de conocimientos y experiencias de los AMPL. Se debe potencializar el uso de las TIC para contar con datos que faciliten la toma de decisiones del sistema.

En aras de mejorar las condiciones de vida de los AMPL, pueden abordarse dos alternativas complementarias. La primera, que el tema se asuma de forma centralizada para generar así políticas institucionales que señalen parámetros generales a todos los EPC del país para el manejo de los grupos con condiciones excepcionales. La otra alternativa es permitir que desde cada uno de los EPC y de acuerdo con las condiciones locales de ubicación se genere una dinámica propia, estructurando programas de acción que atiendan a los AMPL, desde la lógica regional con el apoyo de recursos del orden nacional, departamental y municipal, considerando que cada EPC tiene particularidades y dinámicas que difieren en su interior y que involucran el entorno que los rodea.

Pospena

Como ocurre con los pospenados en general, tampoco el AM cuenta con un programa de apoyo que facilite su inserción en la sociedad, una vez cumplida la pena. Considerando la condición del AM que fue ampliamente desarrollada en el texto, se considera fundamental implementar estrategias dirigidas al AM pospenado, como el acompañamiento de un grupo interdisciplinar de apoyo, la inclusión de estos sujetos a centros de vida; en los casos en los que no se cuenta con apoyo familiar o de otro tipo, identificar las instituciones que trabajan en este campo para consolidar una red de acogida y brindar alternativas de reubicación laboral.